

El Guadalquivir enseña las escrituras



Las inundaciones en Jaén, Córdoba y Sevilla reavivan la polémica por la construcción en zonas con riesgo de riadas

Entorno del aeropuerto de Córdoba cubierto por el agua. :: R. ALCAIDE. EFE

Junta y ayuntamientos estudiarán en mesas provinciales cada punto conflictivo y su posible solución

:: **MARÍA DOLORES TORTOSA**

SEVILLA. Las inundaciones consecuencia de las intensas lluvias en Andalucía han agitado las fiestas navideñas a cientos de familias con sus casas anegadas y enfangadas. Algunas de ellas no han podido volver a sus hogares todavía. Han sido las riadas en poblaciones y zonas ribereñas del Guadalquivir de las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla, ya inundadas en febrero y que han actualizado las críticas sobre el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en cauces urbanos de 2002. Este incluye un mapa de riesgos y actuaciones en los puntos más conflictivos, entre ellos Écija, con cuatro inundaciones en un mes.

Las avenidas y riadas han sacado a flote polémicas como la construcción de viviendas ilegales en zonas inundables, los criterios para el desembalse de los pantanos o las obras que no se han hecho en los puntos de riesgo. Tres casos, Écija y Lora del Río, en Sevilla, y la zona del aeropuerto de Córdoba, sirven a continuación de ejemplo.

Desembalses Lora del Río

Las inundaciones se han producido en el tronco del Guadalquivir, donde las precipitaciones de los últimos días han caído con más in-

tensidad, hasta recogerse 300 litros en un mes, según informó a este periódico Juan Paniagua, director gerente de la Agencia Andaluza del Agua. La intensidad en poco tiempo ha sido espectacular en algunas zonas, donde se ha pasado de cuarenta y tantos a 1.130 metros cúbicos por segundo. Los 74 embalses andaluces se encontraban el pasado jueves (último de intensas lluvias hasta hoy) al 86,23% de su capacidad, con 10.280 hectómetros cúbicos, «un acopio histórico», según califica el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo. Casi la mitad de los pantanos se hallan en la cuenca del Guadalquivir, algunos al cien por cien de capacidad. El desembalse de estos (en torno a 50 fueron aliviados) ha originado protestas de alcaldes, agricultores y vecinos, ya que ha provocado que el cauce se desborde y, como dicen los antiguos, enseñe sus escrituras, es decir sus dominios.

La situación ha sido crítica en poblaciones asentadas donde el cauce del río Guadalquivir es más estrecho, como Lora del Río y Tocina, donde la crecida anegó más dos centenares de casas en dos avenidas en diciembre y otra en febrero. Los alcaldes de estas poblaciones han re-

El plan de prevención está dotado con 1.250 millones de euros hasta el año 2015

clamado a la Junta que los desembalses se planifiquen antes de que llegue la tromba de agua.

Tanto Díaz Trillo como Juan Paniagua han defendido la política de desembalses, que gestiona dos centenares de profesionales. «Siempre se hacen por criterios técnicos y para garantizar la seguridad de las personas y de las presas», reitera Paniagua. Más de doscientas personas, entre ellas 60 técnicos, vigilan los pantanos vía satélite para decidir cómo y cuándo desembalsar.

Obras pendientes Écija

El plan de prevención de avenidas estaba dotado con 1.250 millones de euros para realizar obras en aquellos puntos de riesgo con fecha tope de 2015. En Lora esperan desde hace años la construcción de un muro de contención. Lo mismo que en Écija, donde el arroyo Argamasilla ha provocado hasta cuatro inundaciones de calles y hogares, era una obra prometida desde febrero.

El plan de prevención dispuso que la administración hidráulica aportara hasta 2015 un total de 351,6 millones de euros. Paniagua recuerda que se han gastado 342, el 97% de lo «que teníamos que acometer». En Écija, la obra para evitar que el arroyo Argamasilla anegue el casco histórico está presupuestada en 30 millones y estaba previsto iniciarse en noviembre.

Ilegales Córdoba

El asunto que más polvareda mediática ha despertado es el de las construcciones en zonas inunda-

ALGUNOS DATOS

74

embalses hay en Andalucía, cerca de la mitad en la cuenca del Guadalquivir.

218

puntos de control conectados por satélite en toda Andalucía y 4.000 sensores manejados por 60 especialistas forma parte del Sistema Automático de Información Hidrológica.

1.099

puntos conflictivos hay en el mapa de riesgos andaluz, distribuidos en 428 municipios

bles. Especialmente polémica ha sido descubrir que el aeropuerto de Córdoba y su ampliación puede estar construido en zona inundable, como se demostró tanto en febrero como en diciembre. La Ley del Suelo de 2007 advierte claramente de que los planeamientos urbanos deben incluir un mapa de riesgos naturales, como recordó Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos de España.

La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ha explicado que los planes urbanísticos anteriores a esta

ley y a la andaluza LOUA no incumplen la normativa. Cruz señaló a los ayuntamientos como «responsables» tanto del cumplimiento de esta norma como de vigilar por las construcciones ilegales en zonas proclives a riadas. Junto al aeropuerto cordobés de Aena hay varias urbanizaciones que han sido inundadas, varias de ellas ilegales. Josefina Cruz critica en este sentido al PP, que antes de las inundaciones abogaba por estudiar la posible legalización de urbanizaciones fuera del planeamiento. «Es una irresponsabilidad». Entonces, ¿qué hacer, ¿ordenar su demolición? En este sentido, Cruz, bastante beligerante con las edificaciones ilegales, fue prudente: «Habrá que ver cada municipio y cada caso», respondió a este periódico.

¿Y qué hacer con las urbanizaciones que sí son legales y se inundan? La Junta tiene previsto protegerlas con infraestructuras. El arquitecto y presidente del Consejo Andaluz de Arquitectos, Luis Cano, ha abogado por «expropiar y recalificar suelos urbanizados con riesgo de inundación si no es viable ni posible su protección o si esta es muy costosa», según declaró a Europa Press. Una teoría en parte defendida por los geólogos.

Por lo pronto, el Ejecutivo andaluz, Gobierno y ayuntamientos han creado una mesa de trabajo que trabajará a escala provincial para analizar los problemas de cada punto conflictivo y estrategias para su solución, sean urbanísticas o de construcción de infraestructuras.